

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: ASA 20/013/2006 (público)

Servicio de Noticias: 112/2006

3 de mayo de 2006

<http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA200132006>

India: Hay que poner fin a los homicidios selectivos de miembros de grupos minoritarios

Amnistía Internacional siente gran preocupación por el homicidio de al menos 35 miembros de la minoría hindú en dos atentados selectivos cometidos en el estado indio de Jammu y Cachemira. Según los informes, por lo menos otras diez personas están en estado crítico como consecuencia de los ataques.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Jammu y Cachemira que garantice la investigación rápida e independiente de los incidentes a fin de que los autores comparezcan ante la justicia. La organización pide también a los grupos armados que se abstengan de cometer actos violentos contra civiles, incluidos la tortura y los homicidios deliberados. Los ataques deliberados contra civiles nunca están justificados y están prohibidos por el derecho internacional.

Los atentados se produjeron justo dos días antes del inicio de las conversaciones entre el primer ministro indio Manmoham Singh y los líderes de la Conferencia de Todos los Partidos por la Libertad, coalición que agrupa a dos docenas de grupos separatistas, que comienzan el 3 de mayo. Además, el 2 de mayo empezó una nueva ronda de conversaciones entre la India y Pakistán para debatir nuevas medidas para la creación de confianza, como la apertura de más pasos fronterizos y la circulación de bienes por la frontera.

Los portavoces gubernamentales han declarado que los homicidios fueron obra de un grupo armado, que quería dejar así constancia de su protesta por las conversaciones. Ningún grupo ha reivindicado la responsabilidad de los atentados. Un portavoz de Hizbul Muyajidín, uno de los mayores grupos armados que actúan en Jammu y Cachemira, calificó los atentados de “conspiración profundamente arraigada para difamar a los militantes” y afirmó que no servían al “movimiento de liberación”, culpando de los atentados a agentes de los servicios de inteligencia indios. El portavoz del ejército, teniente coronel Vijay Batra, rechazó estas declaraciones, calificándolas de “totalmente inconcebibles”. Los servicios de seguridad indios habían advertido de un aumento de la violencia a medida que se aproximaban las conversaciones del miércoles.

Según los informes, la noche del 30 de abril, sendos grupos de hombres armados irrumpieron en dos lugares diferentes en zonas de predominio hindú. En el pueblo de Thawa, en el distrito de Doda, reunieron a los varones en la vivienda del jefe. Un sobreviviente declaró posteriormente que los pistoleros vestían uniformes de la policía y el ejército y habían dicho a los habitantes del pueblo que los agentes de seguridad querían celebrar una reunión. Cuando los reunidos preguntaron por qué les hacían esperar, los agresores mataron a más de 20 hombres con disparos a quemarropa. Resultaron heridos al menos 11 hombres más. Muy poco antes, en el vecino distrito de Udhampur, otro grupo de hombres armados había secuestrado a 13 habitantes hindúes; sus cuerpos fueron hallados posteriormente en los bosques cercanos. Tras los ataques, llegaron cientos de soldados de refuerzo al estado para localizar a los autores

de los homicidios.

Información complementaria

Los observadores locales creen que desde que comenzó una rebelión armada en el estado indio de Jammu y Cachemira, en 1989, han perdido la vida entre 45.000 y 60.000 personas. Hay alrededor de 30 grupos armados de oposición activos en el estado, todos los cuales se oponen a la dominación india: algunos desean la independencia, mientras que otros quieren la secesión para incorporarse a Pakistán. Como consecuencia del conflicto, miles de hindúes han huido del estado y viven desde hace años en campos cerca de Jammu y Nueva Delhi.

Hace más de dos años India y Pakistán comenzaron las conversaciones de paz; ambos Estados reivindican la soberanía de la totalidad de la región, actualmente dividida, de Cachemira. Las conversaciones desembocaron en un alto el fuego en la Línea de Control entre las dos partes de Cachemira en noviembre de 2003, en el establecimiento de líneas de autobús entre ambos lados de la frontera y en una serie de conversaciones entre los dos bandos a partir de 2004. Durante este proceso, los grupos armados han recurrido en varias ocasiones a la violencia en un intento de paralizar las conversaciones, a las que se oponen. Amnistía Internacional les ha pedido en reiteradas ocasiones que dejen de utilizar la violencia contra los civiles.

Los grupos armados han sido acusados de causar la muerte de alrededor de 350 hindúes y sijs en los últimos seis años en el estado; según los informes, sólo en el año 2000 fueron asesinados casi 116 miembros de las comunidades minoritarias.

Desde que se iniciaron las conversaciones de paz, han disminuido en cierta medida las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales, aunque siguen llegando informes sobre detenciones arbitrarias, abusos de las leyes de detención preventiva, tortura, muertes bajo custodia y “desapariciones”. No parece que durante este periodo se haya reducido de forma significativa la violencia a manos de los grupos armados.